

Santiago, dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En cuanto al ingreso Corte 600-2023

PRIMERO: Que, comparece don Felipe Barruel Labarca, abogado, actuando en representación de don Luis Felipe Cuevas e interpone reclamo de ilegalidad en base al artículo 71 del Decreto Ley N° 3538, de 1980, en contra del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), respecto de las Resoluciones Exentas N° 5638 de fecha 8 de agosto de 2023 y N° 6373 de fecha 31 de agosto de 2023.

Resumidamente se explica que la primera de ellas impuso al Sr. Flores Cuevas una multa de 10.800 unidades de fomento (UF) y una inhabilitación temporal de 5 años para ejercer cargos de director o ejecutivo principal en entidades fiscalizadas por la CMF, mientras que la segunda rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la primera resolución. El reclamante considera que dichos actos administrativos son ilegales por infringir diversas normas constitucionales y legales que cita.

Expone que el Sr. Flores Cuevas, en su calidad de gerente general de STF Capital Corredores de Bolsa SpA, fue sancionado por la CMF por infracciones a los artículos 29, 32 letras a) y c), 52 y 53 de la Ley N° 18.045, al artículo 5° número 8 inciso primero y 37 del DL 3538, a la Norma de Carácter General N° 18, y a las Circulares N° 695 y N° 1992. Las infracciones consistieron principalmente en proporcionar información falsa al mercado, participar en operaciones para fijar el precio de cuotas de un fondo de inversión, y realizar operaciones ficticias o simuladas.

Argumenta que la CMF no realizó un análisis específico para vincular causalmente las infracciones atribuidas al Sr. Flores Cuevas con las sanciones impuestas, afectando los principios de reserva o legalidad, igualdad ante la ley, debido proceso y proporcionalidad. Además, se critica que el Consejo de la CMF actúe como juez y parte en el proceso sancionatorio.

Sostiene que la CMF no ponderó adecuadamente la colaboración prestada por el Sr. Flores Cuevas durante el proceso, incluyendo su allanamiento a los cargos, la renuncia a rendir prueba, y la solicitud de acogerse al beneficio de colaboración compensada del artículo 58 del DL



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QBEUXQLXPP

3538, de 1980. Luego, en su parecer, estos elementos debieron haber sido considerados para una sanción más benévola.

En ese orden de cosas, alega que las sanciones impuestas son desproporcionadas, considerando que no hubo beneficio económico obtenido de la infracción, no existen reclamos directos de clientes o actores del mercado, y el Sr. Flores Cuevas no presentaba sanciones previas. Además, se cuestiona la falta de fundamentación en la determinación del monto de la multa y la duración de la inhabilitación.

Así las cosas, esgrime que se han infringido los artículos 19 N° 3 inciso 6°, 19 N° 2 y 19 N° 21 inciso 1° de la Constitución Política de la República, así como los artículos 37 y 58 del DL 3538. Alega vulneración al debido proceso, igualdad ante la ley, derecho a desarrollar actividades económicas y principio de proporcionalidad.

Finalmente, solicita que se revoken las resoluciones impugnadas, dejando sin efecto las sanciones de multa e inhabilitación, o subsidiariamente, que se acojan las peticiones contenidas en el artículo 37 en relación con el artículo 58 del DL 3538, de 1980, reduciendo significativamente las sanciones impuestas.

SEGUNDO: Que, informando sobre la reclamación anterior la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), representada por el abogado José Antonio Gaspar, en respuesta al reclamo de ilegalidad interpuesto por don Luis Flores Cuevas contra las Resoluciones Exentas N° 5638 y N° 6373, ambas de 2023, en un lato informe carente de síntesis, expone en resumen que el Sr. Flores Cuevas, en su calidad de gerente general de STF Capital Corredores de Bolsa SpA (STF), fue sancionado por infracciones a diversas normas del mercado de valores, las cuales incluyen:

1. Proporcionar información falsa al mercado, al público y a la CMF de manera grave y reiterada, al no entregar información veraz sobre la situación económica, patrimonial y financiera de la Corredora.

2. Infringir la prohibición de manipulación de precios prevista en el artículo 52 de la Ley N°18.045, participando en operaciones de compraventa de cuotas del fondo CFICAP1B-E con el objeto de fijar su precio.

3. Infringir las prohibiciones del artículo 53 de la Ley N°18.045, realizando operaciones ficticias o simuladas con el propósito de que las cuotas del fondo CFICAP1B-E obtuvieran presencia bursátil.



4. Incumplir gravemente las instrucciones y órdenes de la CMF, al realizar operaciones del giro exclusivo de la Corredora durante un período de suspensión.

En tal contexto, la CMF detalla los hechos que fundamentaron cada una de estas infracciones. Respecto a la primera, se describen diversas manipulaciones contables y operaciones irregulares realizadas entre 2021 y 2023, que permitieron a STF aparentar una situación financiera y patrimonial que no correspondía a la realidad. Estas incluyeron el registro de cheques devueltos, transferencias revertidas y asignación incorrecta de pagos de clientes.

En cuanto a la manipulación de precios, la CMF explica que entre el 15 de febrero y 23 de marzo de 2023, STF y el Sr. Flores realizaron 27 operaciones de compraventa de cuotas del fondo CFICAP1B-E, actuando la Corredora en ambas puntas de la transacción. Estas operaciones no tenían un propósito económico real, sino que buscaban generar una apariencia de liquidez y presencia bursátil para las cuotas.

Sobre las operaciones ficticias, se reitera que estas transacciones no tenían por objeto transferir efectivamente la propiedad de las cuotas, sino simular operaciones para cumplir con los requisitos de presencia bursátil establecidos en la normativa.

Finalmente, respecto al incumplimiento de las instrucciones de la CMF, se detalla que STF realizó operaciones de financiamiento con clientes durante el período en que sus actividades estaban suspendidas por orden de la Comisión.

Así las cosas, la CMF fundamenta su solicitud de rechazo del reclamo en los siguientes argumentos.

El reclamante no ha controvertido los hechos ni las infracciones imputadas, tanto en el procedimiento administrativo como en el reclamo judicial. El Sr. Flores se allanó a los cargos y solicitó los beneficios del artículo 58 del DL 3.538 por colaboración.

Las infracciones quedaron acreditadas en el procedimiento administrativo, detallándose la participación del Sr. Flores en cada una de ellas.



Se destaca la relevancia y gravedad de las infracciones, que afectan la confianza en el mercado de valores y ponen en riesgo el patrimonio de los inversionistas.

La CMF argumenta que ponderó adecuadamente todos los parámetros legales para determinar las sanciones, incluyendo la gravedad de las conductas, el beneficio económico obtenido, el daño causado al mercado, la participación del infractor, y la colaboración prestada.

En ese orden de ideas, sostiene que la pretensión del reclamante de modificar las sanciones excede el marco de competencia del reclamo de ilegalidad, que se limita a revisar la legalidad del acto administrativo y no puede sustituir la decisión de la administración.

En virtud de estos fundamentos, la CMF solicita a esta Corte que rechace en todas sus partes la reclamación de ilegalidad deducida, con costas.

En cuanto al Ingreso Corte acumulado Rol 601-2023

TERCERO: Que, se ha interpuesto reclamo de ilegalidad por don Sebastián Somerville Barbosa y don Álvaro Torres Caroca, en representación de STF Capital Corredores de Bolsa SpA (en adelante, "STF" o la "Corredora"), en contra del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la "Comisión" o "CMF"), respecto de las Resoluciones Exentas N° 5638 de fecha 8 de agosto de 2023 y N° 6373 de fecha 31 de agosto de 2023. La primera de ellas impuso a STF una multa de 13.500 unidades de fomento y la cancelación de su inscripción en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores, mientras que la segunda rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la primera resolución. Los reclamantes consideran que dichos actos administrativos son ilegales por infringir diversas normas constitucionales y legales que citan.

En resumen expone que la Corredora fue sancionada por la CMF por cinco infracciones: a) Proporcionar información falsa al mercado, al público y a la Comisión sobre su situación económica, patrimonial y financiera; b) Infringir la prohibición de manipulación de precios prevista en el artículo 52 de la Ley N° 18.045; c) Infringir las prohibiciones del artículo 53 de la Ley N° 18.045, realizando operaciones ficticias o simuladas; d) Infringir lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 18.045 y otras normas relacionadas, al dejar de cumplir y mantener la razón de cobertura patrimonial; y e) Incumplir



gravemente las instrucciones y órdenes de la CMF, al realizar operaciones del giro exclusivo de la Corredora durante un período de suspensión.

Luego, para efectos de su reclamo argumentan que la CMF no realizó un razonamiento específico para vincular causalmente las infracciones atribuidas a STF con las sanciones impuestas, afectando los principios de reserva o legalidad, igualdad ante la ley, debido proceso y proporcionalidad. Además, critican que el Consejo de la CMF actúe como juez y parte en el proceso sancionatorio.

Asimismo, sostienen que la CMF no ponderó adecuadamente la colaboración prestada por STF durante el proceso, incluyendo su allanamiento a los cargos, la renuncia a rendir prueba, y la solicitud de acogerse al beneficio de colaboración compensada del artículo 58 del DL 3538. Argumentan que estos elementos debieron haber sido considerados para una sanción más benévola.

Indica que pese a que los hechos objetos de la infracción pudieran ser calificados como graves, el reconocimiento de la aplicación del beneficio, sin reparos por el encargado de colaboración, debieron influir en la decisión del caso, resolviendo en favor de su representado, que podría incluso resultar absuelto de todo cargo, eximirse de cualquier sanción ya sea de censura, multa y la de inhabilitación, lo que no ocurrió en el caso de marras. La posibilidad y alcance del beneficio del citado artículo 58, que, para el evento que no alcance la eximente, permite por cierto imponer un castigo patrimonial más benévolo, permitiendo una aplicación o rebaja una rebaja de un 80%. Incluso la ley permite hacer una rebaja de hasta el 30%, en concordancia con lo previsto en el art. 37. Pero el organismo aplicó sin razonamiento legal de ningún tipo una rebaja o reducción de un 10%, en un baremo que no está considerado, ni aun en la Ley 18.045.

Los reclamantes alegan que las sanciones impuestas son desproporcionadas, considerando que no hubo beneficio económico obtenido de la infracción, no existen reclamos directos de clientes o actores del mercado y STF no presentaba sanciones previas. Además, cuestionan la falta de fundamentación en la determinación del monto de la multa y la decisión de cancelar la inscripción de la Corredora.

En ese orden de cosas, arguyen que se han infringido los artículos 19 N° 3 inciso 6°, 19 N° 2 y 19 N° 21 inciso 1° de la Constitución Política de la



República, así como los artículos 37 y 58 del DL 3538, de 1980. Alegan vulneración al debido proceso, igualdad ante la ley, derecho a desarrollar actividades económicas y principio de proporcionalidad.

Finalmente, solicitan en primer lugar se exima totalmente de la multa impuesta. De manera subsidiaria, a la multa originalmente impuesta se imponga una rebaja proporcional a la situación patrimonial de la Corredora, equivalente a un 80%. Para el improbable evento que no se acojan las peticiones precedentes, se rebaje la multa, con arreglo a la ley, aplicando una rebaja prudencial equivalente a 50% o 30 %. En lo que respecta a la pena de cancelación, se pide por no ser ajustado a derecho, se le exima de esa sanción o imponer la suspensión por aplicación del artículo 36 de la ley 18.045 (1 año), por ser una norma *pro reo*, más favorable a la Corredora y a la realidad del caso concreto.

CUARTO: Que informado respecto de este reclamo la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), representada por la abogada Carolina Vásquez Rojas, Abogada Procurador Fiscal (S) de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en respuesta al reclamo de ilegalidad interpuesto por STF Capital Corredores de Bolsa SpA contra las Resoluciones Exentas N° 5638 y N° 6373, ambas de 2023, en un lato escrito escaso en síntesis, refiere que STF Capital Corredores de Bolsa SpA (en adelante "STF" o "la Corredora") fue sancionada por infracciones a diversas normas del mercado de valores, la cuales incluyen:

1. Proporcionar información falsa al mercado, al público y a la CMF de manera grave y reiterada, al no entregar información veraz sobre la situación económica, patrimonial y financiera de la Corredora.

2. Infringir la prohibición de manipulación de precios prevista en el artículo 52 de la Ley N°18.045, participando en operaciones de compraventa de cuotas del fondo CFICAP1B-E con el objeto de fijar su precio.

3. Infringir las prohibiciones del artículo 53 de la Ley N°18.045, realizando operaciones ficticias o simuladas con el propósito de que las cuotas del fondo CFICAP1B-E obtuvieran presencia bursátil.

4. Infringir lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N°18.045 y otras normas relacionadas, al dejar de cumplir y mantener la razón de cobertura patrimonial.



5. Incumplir gravemente las instrucciones y órdenes de la CMF, al realizar operaciones del giro exclusivo de la Corredora durante un período de suspensión.

En ese orden de ideas, se detallan exhaustivamente los hechos que fundamentaron cada una de estas infracciones. Respecto a la primera, se describe diversas manipulaciones contables y operaciones irregulares realizadas entre 2021 y 2023, que permitieron a STF aparentar una situación financiera y patrimonial que no correspondía a la realidad. Estas incluyeron el registro de cheques devueltos, transferencias revertidas y asignación incorrecta de pagos de clientes.

En cuanto a la manipulación de precios, explica que entre el 15 de febrero y 23 de marzo de 2023, STF realizó 27 operaciones de compraventa de cuotas del fondo CFICAP1B-E, actuando la Corredora en ambas puntas de la transacción. Estas operaciones no tenían un propósito económico real, sino que buscaban generar una apariencia de liquidez y presencia bursátil para las cuotas.

Sobre las operaciones ficticias, reitera que estas transacciones no tenían por objeto transferir efectivamente la propiedad de las cuotas, sino simular operaciones para cumplir con los requisitos de presencia bursátil establecidos en la normativa.

Respecto al incumplimiento de la razón de cobertura patrimonial, señala que STF dejó de cumplir con esta obligación al menos en cuatro fechas específicas entre febrero y marzo de 2023, al considerar incorrectamente la presencia bursátil de las cuotas del fondo CFICAP1B-E.

Finalmente, en cuanto al incumplimiento de las instrucciones de la CMF, se detalla que STF realizó operaciones de financiamiento con clientes durante el período en que sus actividades estaban suspendidas por orden de la Comisión.

Así las cosas, fundamenta la solicitud de rechazo del reclamo en los siguientes argumentos:

El reclamante no ha controvertido los hechos ni las infracciones imputadas, tanto en el procedimiento administrativo como en el reclamo judicial. STF se allanó a los cargos y solicitó los beneficios del artículo 58 del DL N° 3.538, de 1980, por colaboración.



Las infracciones quedaron acreditadas en el procedimiento administrativo, detallándose la participación de STF en cada una de ellas.

Se destaca la relevancia y gravedad de las infracciones, que afectan la confianza en el mercado de valores y ponen en riesgo el patrimonio de los inversionistas.

Expone que ponderó adecuadamente todos los parámetros legales para determinar las sanciones, incluyendo la gravedad de las conductas, el beneficio económico obtenido, el daño causado al mercado, la participación del infractor, y la colaboración prestada.

Sostiene que la pretensión del reclamante de modificar las sanciones excede el marco de competencia del reclamo de ilegalidad, que se limita a revisar la legalidad del acto administrativo y no puede sustituir la decisión de la administración.

Argumenta que no ha vulnerado los derechos constitucionales invocados por el reclamante (igualdad ante la ley, debido proceso y derecho a desarrollar actividades económicas), ya que su actuación se ajustó al marco legal y constitucional vigente.

Esgrime que la sanción de cancelación del registro de corredores de bolsa es proporcional a la gravedad de las infracciones cometidas y se encuentra dentro de las facultades legales de la CMF.

En virtud de estos fundamentos, la CMF solicita que se rechace en todas sus partes la reclamación de ilegalidad deducida, con costas.

Respecto de ambas reclamaciones

QUINTO: Que, a la Comisión para el Mercado Financiero le corresponde velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública, considerando los intereses de los inversionistas y asegurados.

Asimismo, le corresponderá velar porque las personas o entidades fiscalizadas, desde su iniciación hasta el término de su liquidación, cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan.

Dicha Comisión se rige por lo establecido en Decreto Ley N° 3538, de 1980 (Ley 21.000) y, supletoriamente, por las normas contempladas en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el



decreto con fuerza de ley N° 1/19653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; y en la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; y en la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, en todo lo no regulado expresamente.

SEXTO: Que en conformidad al artículo 71 del Decreto Ley N° 3538, de 1980, los sancionados por el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, podrán presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, dentro del plazo de diez días hábiles computado de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, contado desde la notificación de la resolución que impuso la sanción que rechazó total o parcialmente el recurso de reposición o desde que ha operado el silencio negativo al que se refiere el inciso tercero del artículo 69.

SEPTIMO: Que puestos en este ámbito, el control que se puede ejercer en sede judicial dice relación solo con la legalidad o ilegalidad del acto impugnado, es decir, cuando existe una infracción de ley propiamente tal, de manera que tanto en lo formal como en el fondo, este reclamo no constituye una nueva instancia que permita hacer una revisión de los antecedentes que se tuvo en cuenta para dictar la resolución reclamada sólo puede velar porque en lo formal se respeten las normas de procedimiento y, en el fondo, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero le dé a las normas legales y reglamentarias propias de su ámbito el sentido y alcance que la correcta interpretación arroja.

En especial respecto de la Reclamación de Luis Flores Cuevas

OCTAVO: Que, en cuanto a la reclamación deducida por Luis Flores Cuevas, contra las Resoluciones Exentas N° 5638 de fecha 8 de agosto de 2023 y N° 6373 de fecha 31 de agosto de 2023, cabe indicar que aquellas, tal como lo recuerda el informe de la propia reclamante, se imputó al Señor Flores, el incurrir en las siguientes infracciones:

“Proporcionar información falsa al mercado, al público y a la Comisión para el Mercado Financiero, de manera grave y reiterada al no entregar información veraz sobre la situación económica, patrimonial y financiera de la Corredora, en conformidad con lo previsto en el artículo 32 letras a) y c) de la Ley N° 18.045 y el artículo 5° número 8 inciso primero de la Ley de la CMF, en



relación con lo dispuesto en artículo 29 de la Ley 18.045, las Secciones I y II de la NCGN° 18, y las Circulares N° 695, y 1992 por cuanto, en su carácter de gerente general, gestionó y permitió que STF, a lo menos entre el 12 de marzo de 2021 y el 15 de febrero de 2023, informara condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia, y los estados financieros terminados al 31 de marzo y 30 de junio de 2022, que no reflejaban la real situación económica, patrimonial y financiera de la Corredora.

b) Infracción a la prohibición prevista en el inciso primero del artículo 52 de la Ley N°18.045, toda vez que, entre el 15 de febrero y el 23 de marzo de 2023, STF participó en una serie de 27 operaciones de compraventa de cuotas de la serie B del fondo CFICAP1B-E en la BCS, con el objeto de fijar el precio de dicho valor, ya que, en su calidad de gerente general de la Corredora determinó los precios de compra y de venta, actuando al mismo tiempo para la cartera propia de la Corredora y como cliente de la misma, ambas partes compradoras y/o vendedoras en cada una de las operaciones.

c) Infracción a las prohibiciones previstas en el artículo 53 de la Ley N° 18.045, por cuanto, entre el 15 de febrero y el 23 de marzo de 2023, en su carácter de gerente general, instruyó la realización de una serie de operaciones en la BCS respecto de cuotas de la serie B del fondo CFICAP1B-E, las cuales eran ficticias o simuladas, toda vez que no se realizaron con el objetivo de transferir su propiedad, sino con el propósito de que dicho valor obtuviese presencia bursátil, en los términos exigidos por la NCG 327; configurando, además, una práctica engañosa destinada a transmitir al mercado y a los clientes de STF la percepción, de que dicho valor se transaba diariamente en bolsa, aparentando una falsa liquidez, respecto de cuotas no rescatables.

d) Infracción grave de la obligación de cumplir las instrucciones y órdenes de la CMF, en conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de la CMF, por cuanto, habiéndose dispuesto la suspensión de sus actividades, mediante la Resolución Exenta N° 2169 de 24 de marzo de 2023, en su calidad de gerente general, instruyó la realización operaciones del giro exclusivo de la Corredora, que implicaron la tenencia temporal o permanente de activos de clientes, al menos respecto de los clientes Rose Anne Bugge, Makarena Barrios Ortiz y Rolando Allende Saa, quienes renovaron operaciones de financiamiento en favor de la Corredora, las que



fueron registradas indebidamente como operaciones a término en el Libro de Operaciones de STF. Dichas operaciones consistieron en que esos clientes, le entregaron a STF sumas de dinero - desde sus cuentas de inversión en STF-, con la condición de que esa corredora de bolsa le devolviera el dinero en un plazo de días determinado, y le pagara una tasa de interés. Para garantizar dicho pago a sus clientes, STF le entregó vendió- a cambio cuotas de la serie B del fondo CFICAP1B-E, obligándose dichos clientes a devolver -vender- dichos valores a STF contra la entrega del dinero.”

NOVENO: Que por estos hechos se impuso Luis Flores Cuevas, la sanción de multa de 10.800 unidades de fomento por infracción a los artículos 29, 32 letras a) y c), 52 y 53 de la Ley N°18.045, al artículo 5° número 8 inciso primero y 37 del DL N°3538, a la Norma de Carácter General N° 18, y a las Circulares N°695 y N°1992; y la sanción accesoria de inhabilidad temporal por 5 años, para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de las entidades descritas en el artículo 36 y en el inciso primero del artículo 37 del D.L. N°3.538, por las infracciones descritas, en relación a los artículos 59 letras a) y e) y 60 letra b) de la Ley N° 18.045. La multa establecida es el resultado de aplicar un beneficio del 10% a la multa de UF 12.000 que correspondía aplicar por las infracciones indicadas.

Al respecto el reclamo sostiene en primer termino que en ambas resoluciones exentas, no existen argumentos lógicos, pormenorizados, que permitan entregar de manera fundada que justifiquen la aplicación de los castigos impuestos a su representado, cuestión que cabe descartar puestos que en la Resolución al hacerse cargo de los fundamentos de la reposición, luego de efectuar una referencia a los mismo, procede en el acápite III a efectuar un análisis de los mismos, el que resulta para estos sentenciadores completo y pormenorizado, haciéndose cargo de sus fundamentos, de manera que lo que se pretende al respecto es una ponderación de mérito y no el establecimiento de alguna ilegalidad en la aplicación de las normas correspondientes.

Dentro de dichos argumentos, no deja de estar presente entre otros que los sancionados no contrvirtieron los hechos ni las infracciones cometidas, y que Resoluciones logran un razonamiento que vincula causalmente las infracciones atribuidas con las sanciones impuestas.



DECIMO: Que desde luego la Comisión ha actuado dentro de sus facultades, entre otras la consagrada en el artículo 5 N° 8 del DL 3538 que señala:

“Artículo 5.- La Comisión está investida de las siguientes atribuciones generales, las que deberán ser ejercidas conforme a las reglas y al quórum de aprobación que determine esta ley:

N° 8. Requerir a las personas o entidades fiscalizadas que proporcionen al público, por las vías que señale, información veraz, suficiente y oportuna sobre sus prácticas de gobierno corporativo y su situación jurídica, económica y financiera.

La Comisión podrá efectuar directamente las publicaciones que fueren necesarias para los fines precisados en el párrafo anterior, con cargo a las personas o entidades fiscalizadas, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en el artículo 7.

Al efecto cabe recordar en cuanto a las infracciones a la Ley N°18.045, que la resolución da por infraccionados los siguientes artículos

Artículo 29 que señala: *“Artículo 29.- Los corredores de bolsa y agentes de valores, deberán cumplir y mantener los márgenes de endeudamiento, de colocaciones y otras condiciones de liquidez, solvencia patrimonial y gestión de riesgos que establezca la Comisión mediante normas de aplicación general que dictará especialmente en relación a la naturaleza de las operaciones, su cuantía, el tipo de instrumentos que se negocien y la clase de intermediarios a que deben aplicarse”.*

El artículo 32 letras a) y c): *“Los corredores de bolsa y los agentes de valores estarán obligados, de acuerdo a las normas de carácter general que imparta la Comisión, y sin perjuicio de sus otras atribuciones a:*

a) Llevar los libros y registros que prescribe la ley y los que determine la Comisión, los que deberán ser preparados conforme a sus instrucciones;

c) Enviar a la Comisión los estados financieros que éste solicite en la forma y periodicidad que determine, la cual podrá exigirles que ellos sean objeto de auditoría por auditores independientes”

Artículo 52: *“Es contrario a la presente ley la manipulación de precios, entendiendo por tal aquella acción que se efectúa con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios de valores de oferta pública.*



Quedarán exceptuadas de la prohibición contemplada en el inciso precedente aquellas actuaciones que, cumpliendo con los requisitos que establezca la Comisión para el Mercado Financiero mediante normas de carácter general, tengan por objeto fomentar la liquidez o profundidad del mercado.” y

Artículo 53: “Es contrario a la presente ley efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor, ya sea que las transacciones se lleven a cabo en el mercado de valores o a través de negociaciones privadas.

Ninguna persona podrá efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.”

Pues bien ninguna de esas normativas y la concurrencia de tales preceptos ha logrado ser desvirtuadas ni en la reposición ni en este recurso de ilegalidad.

UNDECIMO: Que, luego en cuanto esta reclamante sostiene que el Consejo actúa como juez y parte, resulta ser una argumentación que se aparte de lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 20 del DL N°3538, en el sentido de que es precisamente al Consejo al que le corresponde resolver los procedimientos sancionatorios que se originen como consecuencia de la formulación de cargos, aplicando las sanciones que correspondan, según el caso.

En cuanto sostiene que la Resolución 6373 solo procede a reproducir y ajustar lo resuelto de manera preliminar por la Resolución 5638, la verdad es que se trata de una argumentación que no contiene apoyo de normativa legal que impida tal proceder o que le obligue a la reclamada a actuar de otro modo.

DECIMO SEGUNDO: Que en cuanto el reclamo de ilegalidad del Sr. Flores se detiene en la ponderación de elementos que permitieron a la Comisión establecer cuantía de la multa impuesta, cabe señalar que para determinar la existencia de alguna ilegalidad al respecto, debemos precisar que el artículo 58 del DL 3538 dispone:

“De la Colaboración del Presunto Infractor

Artículo 58.- El que incurra en una conducta sancionable por la Comisión podrá acceder a una reducción de hasta el 80% de la sanción



pecuniaria aplicable, cuando se auto denunciare aportando a la Comisión antecedentes que conduzcan a la acreditación de los hechos constitutivos de infracción.

En el caso de una infracción que involucrare a dos o más posibles responsables, el primero en auto denunciarse y aportar antecedentes a la Comisión podrá acceder a una reducción del 100% de la sanción pecuniaria aplicable. Los restantes involucrados, en tanto, sólo podrán acceder a una reducción de hasta el 30%, siempre que aporten antecedentes sustanciales y adicionales a los ya presentados por el primer denunciante.

Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley al delito, a la persona a quien la Comisión le hubiere concedido la reducción del 100% de la sanción pecuniaria aplicable de conformidad con el inciso anterior en el caso que los hechos que se investiguen estén tipificados como delito de acuerdo a las leyes que rigen a las personas, entidades o actividades fiscalizadas por la Comisión. Excepcionalmente, se le reconocerá la extinción de la responsabilidad penal en los casos que los antecedentes aportados permitan revelar o descubrir una o más conductas sancionadas como delito por los artículos 59, letra e, sólo en lo referente a las prohibiciones consignadas en los artículos 52 y 53; 60 letras e, g y h en relación con el artículo 164; o 61, siempre que no se trate de los sujetos señalados en su inciso segundo, todos de la ley N° 18.045, de Mercado de Valores.

Los beneficios indicados en los incisos anteriores no obstarán a la persecución de las responsabilidades civiles que tuvieron lugar. La acción de indemnización de perjuicios correspondiente podrá ser interpuesta ante el tribunal civil competente de conformidad con las reglas generales, y se tramitará de acuerdo al procedimiento sumario establecido en el título XI del libro III del Código de Procedimiento Civil. El tribunal apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Para acceder a los beneficios indicados en los incisos primero, segundo y tercero, quien aporte antecedentes a la Comisión deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Proporcionar antecedentes precisos, veraces y comprobables que representen una contribución efectiva a la constitución de elementos de prueba suficientes para fundar el oficio de cargos.



2. Abstenerse de divulgar la solicitud de este beneficio hasta que se haya emitido la resolución sancionatoria u ordenado archivar los antecedentes del caso.

3. Haber puesto fin a su participación en la conducta antes de presentar su solicitud.

4. No haber sido el organizador o líder de la conducta ilícita, ni haber coaccionando a los demás a participar en ella.

5. No haber sido sancionado previamente por infracciones a las leyes y a la normativa cuya fiscalización corresponde a la Comisión, con alguna de las sanciones previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 36 o 2 y 3 del artículo 37.

La persona que acceda a alguno de los beneficios descritos en el inciso tercero deberá, además, contribuir efectivamente a la investigación en el marco del proceso penal que lleve adelante el Ministerio Público por los mismos hechos. Para estos efectos, deberá proporcionar al fiscal del Ministerio Público a cargo del caso todos los antecedentes que hubiere aportado en la investigación conducida por la Comisión, y prestar declaración en calidad de testigo cuando fuere requerido por éste o por el tribunal llamado a conocer de los hechos, en su caso. La declaración podrá ser prestada en la forma dispuesta por el artículo 191 del Código Procesal Penal, caso en el cual será incorporada al juicio oral en la forma prevista en el artículo 331 del mencionado Código.

Si el testigo legalmente citado no compareciere sin justa causa o se negare a ratificar su declaración prestada ante la Comisión y así lo declarare el juez de garantía competente a petición del Ministerio Público, o incurriere en alguna de las conductas previstas en los artículos 206 y 269 bis del Código Penal, será privado de los beneficios a los que hubiere accedido en virtud del inciso tercero del presente artículo. En contra de la resolución del juez de garantía que privare de dichos beneficios procederá el recurso de apelación que se concederá en ambos efectos.

Quien solicite alguno de los beneficios a que se refieren los incisos primero, segundo y tercero de este artículo a sabiendas de que se basa en antecedentes falsos o fraudulentos, será sancionado con las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales”



Como se observa, en o pertinente a este caso debemos partir de la base que se trata de un posible beneficio que no tiene un tope inferior, solo el superior, según queda en evidencia de la frase: *“podrá acceder a una reducción de hasta el 80% de la sanción pecuniaria aplicable”*, sin que existan parámetros objetivos para regular el alcance de la reducción dentro de este tramo.

En el caso, la resolución que resuelve la reclamación se hace cargo de esta pretensión de la defensa de Luis Flores Cuevas indicando que la Resolución N°5638, reconoció que los recurrentes dieron respuesta a los requerimientos de esta Comisión y del Fiscal, reconociendo los hechos que fundamentaron el procedimiento sosteniendo que STF Capital se allanó a los cargos formulados y que el Sr. Flores reconoció los hechos, sin perjuicio de solicitar la recalificación de algunas imputaciones, procediendo a un análisis al respecto.

Luego para establecer el porcentaje de reducción la misma resolución contiene los fundamentos cuyo mérito no corresponde ponderar en un reclamo de ilegalidad, pues ha sido fijada por la autoridad en el ámbito de su competencia y se enmarca dentro de lo dispuesto en la normativa ya citada.

En efecto al respecto la Resolución sostiene:

“Ahora bien, esta Comisión estima que dado que los hechos manifestados en la Autodenuncia fueron entregados cuando ya eran materia de investigación, y que, si bien permitieron acelerar la investigación, eran antecedentes que estaban siendo pesquisados por este Servicio, la colaboración será tasada teniendo presente esa consideración.

Por consiguiente, esta Comisión estima que, en relación a las infracciones contenidas en la solicitud de beneficios antes indicada, resulta aplicable el beneficio establecido en el artículo 58 del Decreto Ley N°3.538, y en atención a lo razonado precedentemente, se le otorgará una rebaja del 10% de la sanción pecuniaria que habría correspondido aplicar”

De esta forma no se logra visualizarse tampoco alguna vulneración a las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N° 3 inciso 6°, 19 N° 2 y 19 N° 21 inciso 1° de la Constitución Política de la República.

DECIMO TERCERO: Que con lo dicho y considerando que los documentos acompañados en Folio 58 consistentes en copia de un Informe Final de fecha 14 de julio de 2023, que firma don Andrés Montes, y copia de



un documento consistente en la Política de Colaboración del Presunto Infractor de la CMF, en nada logran alterar las conclusiones de este Tribunal se desestimaré la reclamación de Luis Flores Cuevas en todas sus partes, esto es incluso en su petición subsidiaria.

En especial en relación con la reclamación de STF Capital.

DECIMO CUARTO: Que en cuanto al ingreso acumulado Rol 601, este pretende que se enmiende la resolución impugnada, se exima totalmente STF Capital Corredores de Bolsa SpA., de la multa impuesta o de manera subsidiaria, a la multa originalmente impuesta se imponga una rebaja proporcional a la situación patrimonial de la Corredora, equivalente a un 80%.y para el evento que no se acojan peticiones precedentes, se rebaje la multa, con arreglo a la ley, aplicando una rebaja prudencial equivalente a 50% o 30 %. En cuanto la pena de cancelación, se pide por no ser ajustado a derecho que se le exima de esa sanción, imponiendo la suspensión por aplicación del artículo 36 de la ley 18.045 esto es un año por ser una norma *pro reo*, más favorable a la Corredora y a la realidad del caso concreto.

DECIMO QUINTO: Que al respecto, reiterando lo ya dicho en los considerandos quinto a séptimo de esta sentencia, cabe indicar que las resoluciones reclamadas dieron por establecido las siguientes infracciones en que incurrió STF Capital Corredores de Bolsa SpA.

a) Proporcionar información falsa al mercado, al público y a la Comisión para el Mercado Financiero, de manera grave y reiterada al no entregar información veraz sobre su situación económica, patrimonial y financiera, en conformidad con lo previsto en el artículo 32 letras a) y c) de la Ley N° 18.045 y el artículo 5° número 8 inciso primero de la Ley de la CMF, en relación con lo dispuesto en artículo 29 de la Ley 18.045, las Secciones I y II de la NCG N° 18, y las Circulares N° 695, y 1992 por cuanto, a lo menos entre el 12 de marzo de 2021 y el 15 de febrero de 2023, STF informó condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia, y los estados financieros terminados al 31 de marzo y 30 de junio de 2022, que no reflejaban la real situación económica, patrimonial financiera de la Corredora.

b) Infracción a la prohibición prevista en el inciso primero del artículo 52 de la Ley N° 18.045, toda vez que, entre el 15 de febrero y el 23 de marzo de 2023, la STF realizó una serie de 27 operaciones de compraventa de cuotas de la serie B del fondo CFICAP1B-E en la BCS, con el objeto de fijar el precio



de dicho valor, ya que la Corredora determinó sus precios de compra y de venta, actuando al mismo tiempo para su cartera propia y como intermediario del Sr. Luis Flores, ambas partes compradoras y/o vendedoras en cada una de las operaciones.

c) *Infracción a las prohibiciones previstas en el artículo 53 de la Ley N° 18.045, por cuanto, entre el 15 de febrero y el 23 de marzo de 2023, la Corredora realizó una serie de operaciones en la BCS respecto de cuotas de la serie B del fondo CFICAP1B-E, las cuales eran ficticias o simuladas, toda vez que no se realizaron con el objetivo de transferir su propiedad, sino con el propósito de que dicho valor obtuviese presencia bursátil, en los términos exigidos por la NCG 327; configurando, además, una práctica engañosa destinada a transmitir al mercado y a los clientes de STF la percepción, de que dicho valor se transaba diariamente en bolsa, aparentando una falsa liquidez, respecto de cuotas no rescatables.*

d) *Infracción a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 18.045 y el primer párrafo de la Sección IV de la NCG N° 16, en relación a la Sección III de esa misma norma, ello en relación al numeral 3.1 de la Sección I y el numeral 2 de la Sección II de la NCG N° 18, y en relación con lo previsto en las Circulares N° 632 y 695, por cuanto, al menos los días 10 y 24 de febrero de 2023, y 7 y 8 de marzo de 2023, STF dejó de cumplir y mantener la razón de cobertura patrimonial, toda vez que si bien informó para aquellos días un monto de cobertura patrimonial equivalente a un 68.79%, 59.91%, 53.98% y 52.42% del patrimonio líquido, realizados los ajustes correspondientes producto de su revisión, dichos valores alcanzaron a un 119.96%, 115.86%, 100.53% y 100.02% del patrimonio líquido, respectivamente, superando con creces el límite de 80% que el número 3.1 de la Sección I de la NCG N° 18 establece.*

e) *Infracción grave de la obligación de cumplir las instrucciones y órdenes de la CMF, en conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de la CMF, por cuanto, habiéndose dispuesto la suspensión de sus actividades, mediante la Resolución Exenta N° 2169 de 24 de marzo de 2023, STF realizó operaciones de su giro exclusivo, que implicaron la tenencia temporal o permanente de activos de clientes, al menos respecto de los clientes Rose Anne Bugge, Makarena Barrios Ortiz y Rolando Allende Saa, quienes renovaron operaciones de financiamiento en favor de la*



Corredora, las que fueron registradas indebidamente como operaciones a término en el Libro de Operaciones de STF. Dichas operaciones consistieron en que esos clientes, le entregaron a STF sumas de dinero - desde sus cuentas de inversión en STF-, con la condición de que esa corredora de bolsa le devolviera el dinero en un plazo de días determinado, y le pagara una tasa de interés. Para garantizar dicho pago a sus clientes, STF le entregó vendió- a cambio cuotas de la serie B del fondo CFICAP1B-E, obligándose dichos clientes a devolver vender- dichos valores a STF contra la entrega del dinero”

DECIMO SEXTO: Que por estos hechos se impuso a STF Capital Corredores de Bolsa SpA, la sanción de multa de 13.500 unidades de fomento y de cancelación del Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores, por infracción a los artículos 29, 32, letras a) y c), 52 y 53 de la Ley N°18.045, al artículo 5 número 8 inciso primero y 37 del DL N°3538, a las Normas de Carácter General N° 16 y N° 18, y las Circulares N°632, N° 695, y N°1992. La multa establecida es el resultado de aplicar un beneficio del 10% a la multa de UF 15.000 que correspondía aplicar por las infracciones indicadas. En cuanto al tenor de las normas legales citadas aquellas se encuentran ya transcritas en el considerando décimo de esta sentencia

DECIMO SEPTIMO: Que respecto en cuanto el reclamo sostiene que en ambas resoluciones exentas, no existen argumentos lógicos, pormenorizados, que permitan entregar de manera fundada que justifiquen la aplicación de los castigos impuestos a su representado, cuestión que cabe descartar puesto que la Resolución, al hacerse cargo de los fundamentos de la reposición, luego de efectuar una referencia a los mismos, procede en el acápite III a efectuar un análisis, el que resulta para estos sentenciadores completo y pormenorizado, haciéndose cargo de sus fundamentos, de manera que lo que se pretende al respecto es una ponderación de mérito y no el establecimiento de alguna ilegalidad en la aplicación de las normas correspondientes. Dentro de dichos argumentos no deja de estar presente la circunstancia que la sancionada no controvertió los hechos ni las infracciones y existe un adecuado razonamiento sobre la vinculación causal entre las infracciones atribuidas con la sanción impuesta.

DECIMO OCTAVO: Que, luego en cuanto esta reclamante sostiene que el Consejo actúa como juez y parte, resulta ser una argumentación que



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QBEUXQLXPP

se aparta de lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 20 del DL N°3538, en el sentido de que es precisamente al Consejo al que le corresponde resolver los procedimientos sancionatorios que se originen como consecuencia de la formulación de cargos, aplicando las sanciones que correspondan, según el caso.

En cuanto sostiene que la Resolución 6373, reproduce lo resuelto por la Resolución 5638, no existe normativa legal que impida tal proceder o que le obligue a la reclamada a actuar de otro modo.

DECIMO NOVENO: Que, se sostiene por el reclamo, que a su juicio, no existió por parte de la autoridad reguladora una aplicación proporcional de la sanción, como tampoco existió una ponderación correcta de las distintas circunstancias atenuantes que hacen variar el juicio de reproche que fue objeto su mandante y por ende su responsabilidad administrativa.

Se agrega que si bien las conductas podrían tener el carácter de graves, lo que fue reconocido por su parte al allanarse a los cargos formulados, no tienen la máxima gravedad que afirma la resolución impugnada, pues no irroga perjuicio a los clientes, como, asimismo, el impacto en el mercado fue mínimo.

Al respecto cabe indicar que las resoluciones si pondera las circunstancias atenuantes y en cuanto a la gravedad de las conductas se trata de una ponderación de mérito y no de una ilegalidad. En efecto en las resoluciones reclamadas en cuanto a la gravedad de las conductas infraccionales, con fundamentos como los siguientes:

“Las infracciones cometidas, consistentes en proporcionar información falsa al mercado, a esta Comisión y al público en general, generaron condiciones que llevan a una pérdida de confianza en el mercado, desincentivando a los diversos actores de participar en éste, así como que los agentes funcionen en condiciones deficientes, considerando que los estándares han sido impuestos como una forma de asegurar que los intermediarios cumplan sus compromisos con los inversionistas, intermediarios contrapartes y el mercado en general, configurándose un incumplimiento de carácter grave”. Agrega para desestimar la reconsideración lo siguiente: “En relación con el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción, y a diferencia de lo señalado por los recurrentes, en la Resolución N°5638 se especificó que STF Capital se



mantuvo en operaciones pese a no contar con las condiciones económicas para ello, recibiendo ingresos, captando clientes y negocios, situaciones que no habrían tenido lugar en caso de haberse comunicado información fidedigna de la intermediaria, pues la circunstancia de haber funcionado con menores recursos que los que debería tener, e incluso estando suspendida, operó en beneficio del negocio en el que participaban los formulados de cargos.

Pues bien tales argumentos dan respuesta implícita a la mayor ponderación que la reclamante insta producto de su allanamiento.

VIGESIMO: Que sostiene esta reclamante que no existe un razonamiento que contenga un criterio de cálculo específico y concreto que permita establecer la multa, lo que revela lo impreciso que resultan los criterios legales que adoptó el ente regulador al momento de dictaminar su decisión de condena.

Al respecto cabe señalar que para determinar la existencia de alguna ilegalidad debemos precisar lo dicho por el artículo 58 del DL 3538 ya reproducido en el considerando décimo segundo de esta sentencia.

Como se observa, en lo que dice relación con el caso de esta reclamante debemos partir de la base que se trata de un posible beneficio que no tiene un tope inferior, solo el superior, según queda en evidencia de la frase: *“podrá acceder a una reducción de hasta el 80% de la sanción pecuniaria aplicable”*, sin que existan parámetros objetivos para regular el alcance de la reducción dentro de este tramo.

En el caso, la Resolución que resuelve la reclamación se hace cargo de esta pretensión de la defensa de Luis Flores Cuevas indicando que la Resolución N°5638, reconoció que los recurrentes dieron respuesta a los requerimientos de esta Comisión y del Fiscal, reconociendo los hechos que fundamentaron el procedimiento sosteniendo que STF Capital se allanó a los cargos formulados y que el Sr. Flores reconoció los hechos, sin perjuicio de solicitar la recalificación de algunas imputaciones, procediendo a un análisis al respecto.

Luego para establecer el porcentaje de reducción la misma resolución contiene los fundamentos cuyo mérito no corresponde ponderar en un reclamo de ilegalidad, pues ha sido fijada por la autoridad en el ámbito de su competencia y se enmarca dentro de lo dispuesto en la normativa ya citada.



En efecto al respecto la Resolución sostiene:

“Ahora bien, esta Comisión estima que dado que los hechos manifestados en la Autodenuncia fueron entregados cuando ya eran materia de investigación, y que, si bien permitieron acelerar la investigación, eran antecedentes que estaban siendo pesquisados por este Servicio, la colaboración será tasada teniendo presente esa consideración.

Por consiguiente, esta Comisión estima que, en relación a las infracciones contenidas en la solicitud de beneficios antes indicada, resulta aplicable el beneficio establecido en el artículo 58 del Decreto Ley N°3.538, y en atención a lo razonado precedentemente, se le otorgará una rebaja del 10% de la sanción pecuniaria que habría correspondido aplicar”

De esta forma no se logra visualizarse tampoco alguna vulneración a las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N° 3 inciso 6°, 19 N° 2 y 19 N° 21 inciso 1° de la Constitución Política de la República

VIGESIMO PRIMERO: Que con lo dicho y considerando que los documentos acompañados en Folio 58 consistentes en copia de un Informe Final de fecha 14 de julio de 2023, que firma don Andrés Montes, y copia de un documento consistente en la Política de Colaboración del Presunto Infractor de la CMF, al igual que en el caso del reclamo Luis Flores Cuevas en nada logran alterar las conclusiones de este Tribunal se desestimaré la reclamación de STF Capital Corredores de Bolsa SpA en todas sus partes, esto es incluso en su petición subsidiaria.

VIGESIMO SEGUNDO: Que todo lo anterior fue resuelto luego desestimada que sea la proposición de diligencias insinuadas por la reclamante a folio 58, la que por lo demás no instó que se recibiere a prueba el reclamo.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y 71 del Decreto Ley N° 3538, de 1980, se resuelve:

Que **se rechazan** los reclamos de ilegalidad deducidos por Luis Felipe Cuevas y STF Capital Corredores de Bolsa SpA en contra de las Resoluciones Exentas N° 5638 de fecha 8 de agosto de 2023 y N° 6373 de fecha 31 de agosto de 2023, dictadas por el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.







Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QBEUXQLXXPP

Redacción del Ministro Sr Hernán Crisosto Greisse.
Rol 600-2023 Contencioso Administrativa (acumulada Rol 601-2023)

Pronunciada por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Hernán Crisosto Greisse e integrada, además, por la ministra (s) señora Paola Díaz Urtubia y el abogado integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers. No firma la ministra (s) señora Díaz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

<div></div> <div>Hernán Alejandro Crisosto Greisse Ministro Corte de Apelaciones Dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro 11:48 UTC-3</div> <div></div>	<div></div> <div>Rodrigo Hernán Asenjo Zegers Abogado Corte de Apelaciones Dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro 13:10 UTC-3</div> <div></div>
---	---

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QBEUXQLXXPP

Santiago, dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y Considerando:

PRIMERO: Que don Sebastián Somerville Barbosa, en representación según se acreditará de STF CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SpA., en adelante e indistintamente “STF” o la “Corredora”, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto Ley N°3.538, interpuso reclamo de ilegalidad en contra del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante la “Comisión” o “CMF”), respecto de los siguientes actos administrativos:

1. Resolución Exenta N° 8551, de fecha 16 de noviembre del 2023, dispuesta por doña Solange Michelle Bernstein Jáuregui, en su calidad de Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante “CMF”), mediante la cual decidió ejecutar un acuerdo del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, adoptado en Sesión Ordinaria N° 366 de fecha 16 de noviembre de 2023, que se resuelve “1.- SUSPENDASE la totalidad de las actividades de STF Capital Corredores de Bolsa SpA, por el lapso en que continúe en tramitación el reclamo de ilegalidad ingreso rol N°601-2023, es decir, hasta que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que resuelva dicho reclamo.2.- Comuníquese la presente Resolución a las Bolsas de Valores y Empresas de Depósitos de Valores existentes en el país.”

2.- Resolución exenta N° 9128, de fecha 1 de diciembre de 2023, notificada vía correo electrónico de fecha 1 de diciembre de 2023, que resolvió el recurso de reposición presentado en contra de la resolución exenta señalada en el número anterior.

Previa referencia a los alcances y fundamentos principales de las Resoluciones reclamadas someramente indica que El Consejo para el Mercado Financiero argumenta sin motivación alguna, que esa sanción obedece a la necesidad de adoptar “*medidas para el resguardo del interés público y la debida protección de inversionistas...*”. Es dable mencionar, como contexto, que, por Acuerdo del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, adoptado en Sesión Extraordinaria N°129 de 7 de agosto de 2023, que dispone medidas que indica respecto de STF Corredores de Bolsa SpA conforme a lo dispuesto en el artículo 20 n°12 del decreto ley N°3.358, dispuso instruir a STF: “- *dejar a disposición de sus dueños, los títulos que mantenga en custodia en el Depósito Central de Valores S.A., Depósito de*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QXDRXQMXXPP

Valores, a la fecha de la presente Resolución, de modo que los titulares puedan ejercer directamente en esa entidad sus derechos de propiedad sobre los correspondientes valores. Para dichos efectos, STF Capital Corredora de Bolsa SpA deberá hacer entrega del detalle de los títulos mantenidos en custodia y la identificación de sus respectivos dueños al Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores, en el plazo de un día hábil contado desde la presente Resolución. Del mismo modo, respecto de los fondos o cuentas por pagar a clientes y contrapartes, de las cuotas de fondos nacionales mantenidas en las respectivas administradoras de fondos y de los valores extranjeros de clientes que se encuentran en custodios extranjeros, sujetos a contratos regulados por la Circular N°1046 deberá informarles acerca de las alternativas para ejercer en el más breve plazo sus derechos de propiedad.

- comunicar a los clientes, dentro del plazo de un día hábil, contado desde la fecha de la presente resolución, por los medios que normalmente utiliza y exponer en un lugar visible de su sitio web, que su inscripción en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores ha sido cancelada por las razones citadas en la Resolución Exenta N°5638 de 8 de agosto de 2023. Asimismo, deberá informar acerca de los procedimientos que deberán seguir sus clientes para retirar sus activos.

- informar diariamente a esta Comisión sobre cada evento ejecutado en cumplimiento de las instrucciones anteriores, con los respaldos documentales del caso, hasta el completo retiro de los clientes de todos sus activos en STF Capital Corredores de Bolsa SpA.

- proceder, atendido lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°18.045 de Mercado de Valores y la cancelación de la inscripción del intermediario en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores, al cambio del nombre de la sociedad.

Respecto de aquello sostiene que como podrá apreciar la Corte, las “medidas para el resguardo del interés público y la debida protección de inversionistas...”, ya se encontraban tomadas e instruidas, por lo que resulta redundante y fuera de toda lógica volver a aplicar una sanción que como se indicó, ya había sido aplicada. Que no resulta razonable ni menos procedente establecer una sanción como la que les convoca por cuanto, aun cuando no se encuentra ejecutoriada la resolución sobre la cual descansa el



veredicto de condena durante la tramitación del proceso ante esa Comisión hubo 3 resoluciones distintas que dispusieron medidas de restricción hacia la Corredora¹, las que tenían como propósito la de impedir su funcionamiento y operaciones con clientes y por cierto al mercado. Debe recordarse que los efectos de la suspensión de las actividades contenidas en las resoluciones exentas mencionadas tuvieron efectos inmediatos. Primero transitorios y después, pese a la existencia del reclamo de ilegalidad, carácter de permanente.

Agrega no está en juego la protección del público y el mercado. Tampoco el hecho que el organismo recurrido cuenta con las facultades legales para fiscalizar, llevar a cabo procesos administrativos e imponer sanciones. Lo cierto y evidente es que detrás de esa decisión la Comisión pretende anticipar el resultado del reclamo de ilegalidad presentado por mi representada, en el evento que ese recurso prospere y sea acogido. Se esboza una pugna entre organismos del Estado entre lo que se pretende versus con lo que eventualmente se resuelva. Es lo que se conoce como el efecto relativo de las sentencias, cuya mención legal la conocemos por estar inserta en el artículo 3 del Código Civil. Se genera una pugna sin precedentes, lo que hace que la decisión adoptada con fecha 16 de noviembre y luego ratificada con fecha 1 de diciembre del presente deba ser revocada y dejada sin efecto.

Otro asunto que merece atención se encuentra en Resolución Exenta N° 6177. En esa resolución se hizo efectiva la cancelación de las operaciones. Para todos fines prácticos le dan el carácter de ejecutoria, sin embargo, el cambio de la razón social queda supeditado al reclamo de ilegalidad. Esa resolución en lo pertinente señala: "1.1.- EJECÚTESE el acuerdo del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, adoptado en Sesión Ordinaria N°354 de 24 de agosto de 2023, que acordó suspender la instrucción formulada a través de la Resolución Exenta N°5682 relativa a proceder al cambio de nombre de la sociedad, hasta que la Resolución Exenta N°5638 pueda ser cumplida, esto es, que no existan recursos pendientes en su contra.

En cuanto a cómo se manifiestan en concreto las infracciones, indica que debido a las resoluciones exentas 5638 y 6371, en virtud de las cuales se estableció de manera categórica la cancelación de la Corredora, lo que fue



objeto de los respectivos recursos de reposición y posterior reclamo de ilegalidad que, como se dijo, se tramita ante esta Corte bajo el Rol 601-2023, lo que provoca entonces que la Comisión deja de tener competencia. Análogamente en bonam parte, es similar a lo que se conoce como el desasimiento del tribunal para cuando dictan una sentencia definitiva o interlocutoria y que son objeto de recursos (de apelación o casación). Por lo mismo, no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 20 N° 12 del Decreto Ley N° 3538, no pidiendo entonces *fiscalizar* e imponer arbitrariamente la sanción como la que nos convoca.

De manera adicional resulta evidente la infracción a los siguientes principios:

Principio de non bis in idem: que hace consistir que en 4 actos administrativos diferentes esa Comisión dispuso en carácter transitorio (2 veces) y con efectos permanentes (dos). En todas ellas se dispuso respecto de la misma persona jurídica el mismo tipo de sanción, que afectan las actividades de la Corredora. En un cuarto acto, intentando enervar los alcances de los mecanismos de impugnación como lo es reclamar de la ilegalidad del acto, se pretende de manera forzada establecer una medida transitoria, en espera que se resuelva la cuestión principal. Se pretende de manera forzada una medida cautelar no reglada, de manera reiterada y sin que exista mérito para ello, lo que es una infracción legal manifiesta.

Principio de proporcionalidad: Siguiendo la corriente del Tribunal Constitucional se debe consultar si resulta razonable entonces la aplicación de las resoluciones y la forma cómo éstas pueden impactar respecto de quien se pretende aplicar. De ese modo se sostiene que cuando no resultan razonable deviene en actos arbitrarios que afectan ese principio.

Al debido proceso: Que hace consistir en que la Comisión se reunió en sesión ordinaria N° 366, de fecha 16 de noviembre de 2023, Aun cuando por mandato legal la tramitación ante la CMF estaba suspendida en virtud del reclamo de ilegalidad, esa Comisión se reunió para adoptar una decisión que por cierto está viciada. Lo que debió hacer era generar una instancia administrativa especialmente convocada previa citación de su representada, que pretendiera en su función fiscalizadora la de conocer las labores o actividades que pudiera estar realizando la Corredora, que en esta etapa son solo y exclusivamente de carácter interno y administrativas. Resalta que ante



el primer acto de suspensión de los ya mencionados la Corredora hizo cambios, los que fueron debidamente informados al organismo fiscalizador. Por lo tanto, no atendible que con ocasión de esta nueva *suspensión* exista una protección cierta hacia el público en general o al mercado. Desde agosto del presente año, con motivo de las drásticas sanciones dictaminadas en contra de la corredora, que son objeto del reclamo de ilegalidad N° 601-2023 tantas veces mencionados no hubo llamados, citaciones o notificaciones desde la CMF hacia la Corredora, que se encuadren dentro del proceso administrativo de la CMF. Lo cierto es que todos los actos tanto administrativos como judiciales deben ser intimados, es decir, deben darse a conocer. En la especie no hubo un llamado de alerta. Lo cierto, como se dijo más arriba, la Comisión ni la CMF podían hacerlo por el efecto del desasimiento. Ocurre que recién en noviembre del presente, de oficio se dispuso esa sanción.

Principio de legalidad: En cuanto solo se pueden aplicar sanciones por aquellos asuntos y por penas que estén regulados con anterioridad a la ejecución del hecho mismo. La manifestación de ese principio descansa en otros subprincipio, que detalla como la Reserva legal: La Irretroactividad de la ley: y La Taxatividad penal o mandato de determinación: que deje registro del acta del acuerdo. Eso invalida también el acto.

Finalmente pide tener por interpuesto reclamo de ilegalidad en contra del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante la "Comisión" o "CMF"), respecto las resoluciones exentas N° 8551 de fecha 16 de noviembre de 2023 y N° 9128 de fecha 1 de diciembre del esta última que resolvió el recurso de reposición presentado, acogerlo a tramitación, y con arreglo a derecho se enmienda la resolución impugnada revocando lo resuelto dando lugar a las peticiones señaladas en el cuerpo del escrito, consistentes en dejar sin efecto las sanciones de suspensión impuesta por ser ilegal y contraria de derecho.

SEGUNDO: Que Marcelo Chandia Peña, Abogado Procurador Fiscal por la Comisión Para El Mercado Financiero, en un lato informe carente de síntesis sostiene que STF Capital Corredores de Bolsa SpA pretende dejar sin efecto la medida de suspensión de actividades de la Corredora, dispuesto por el lapso en que continúe en tramitación el reclamo de ilegalidad ingreso rol N° 601 2023. El reclamo de ilegalidad se construye sobre la base de que



la medida de suspensión de actividades de la Corredora, correspondería a una sanción que a través de los actos administrativos reclamados daría el carácter de ejecutoria a la cancelación de la Corredora del Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores impuesta en el contexto del procedimiento administrativo sancionatorio seguido a su respecto. De esta forma, lo que se sub entiende del reclamo es que STF quiere seguir operando como corredora, no obstante haber incurrido en deliberadas y múltiples violaciones a las normas más básicas a las que debe someterse un corredor de bolsa y a pesar de que los hechos investigados y reconocidos, asentados y sancionados revisten el carácter de un atentado al Mercado Financiero de la máxima gravedad.

Sostiene que la única la única infracción que podría cometer la CMF en un caso como este sería permitir a esta corredora seguir participando en el mercado, frente a la extrema gravedad de las conductas sancionadas, la aseveración del requirente, en cuanto a que existe una desproporción en la resolución reclamada, deviene en un artificio descomunal e infinitamente apartado de la realidad, lo que justifica, desde ya, el rechazo de este reclamo.

También es llamativa la osadía de acusar a la CMF de haber vulnerado y atentar contra los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y del debido proceso la corredora realiza estas imputaciones, en un par de párrafos, sin mayor explicación, y a pesar de que ha reconocido los hechos y no ha contradicho las infracciones imputadas.

Que en efecto, el 16 de mayo de este año, la corredora y 15 ejecutivos, directores y accionistas presentaron a la CMF una autodenuncia en la que, entre otras conductas infraccionales, admitieron movimientos contables, de flujo y documentales que tuvieron por objetivo proporcionar a la autoridad información que permitiera cumplir los índices de patrimonio, liquidez y solvencia. En efecto, la corredora infringió la Ley de Mercado de Valores y la normativa aplicable a las corredoras de bolsa. El reclamante lo reconoció expresamente, realizando estas conductas de manera premeditada, mintió al mercado, al proporcionarle información falsa, de manera grave y reiterada, así como al mismo tiempo ejecutó operaciones bursátiles ficticias en las cuales se desnaturalizó su finalidad, siendo esos medios engañosos frente al mercado, puesto que a través de dichas operaciones se hizo aparecer como



operaciones a firme transacciones que en definitiva no lo eran ni estaban en condiciones de serlo jamás.

Indica que desobedeció la instrucción preventiva de suspensión de operaciones dada por la CMF. No bastándole con todo aquello, tampoco dio cumplimiento, al menos, en febrero y marzo de 2023, la cobertura patrimonial que le exige la ley.

Luego hace referencia a los antecedentes que llevaron a la suspensión de funciones de la Corredora, indicando que las situaciones descritas llevaron a que, a través de la Resolución Exenta N° 3.711 de 26 de mayo de 2023, se resolviera suspender la totalidad de las actividades, junto con la inscripción de STF Capital Corredores de Bolsa SpA en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores por un lapso de 120 días. Como explicará más adelante, por Resolución Exenta N° 5638, la Comisión para el Mercado Financiero, sancionó a STF Capital Corredores de Bolsa SpA, con una multa de 13.500 unidades de fomento y con la sanción de cancelación del Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores, por infracción a los artículos 29, 32, letras a) y c), 52 y 53 de la Ley N° 18.045, al artículo 5 número 8 inciso primero y 37 del DL N° 3538, a las Normas de Carácter General N° 16 y N° 18, y las Circulares N° 632, N° 695, y N° 1992. Contra esta resolución STF dedujo reclamo de ilegalidad, de conformidad con el artículo N° 71 del DL. N° 3538. Por ello, mediante la Resolución Exenta N° 8.551 de 16 de noviembre de 2023, la Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero resolvió ejecutar el acuerdo del Consejo de la Comisión adoptado en Sesión Ordinaria N° 366 de 16 de noviembre de 2023 de suspender la totalidad de las actividades de STF Capital Corredores de Bolsa SpA, por el lapso en que continúe en tramitación el reclamo de ilegalidad ingreso rol N° 601 2023, es decir, hasta que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que resuelva dicho reclamo.

Indica que por la Resolución Exenta N° 5638, la Comisión para el Mercado Financiero, considerando y ponderando todas las presentaciones, antecedentes y pruebas contenidos y hechos valer en el procedimiento sancionatorio, sancionó a STF Capital Corredores de Bolsa SpA, por las infracciones que en ella se indicaron y resolvió aplicar a STF Capital Corredores de Bolsa SpA, la sanción de multa de 13.500 unidades de fomento y de cancelación del Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QXDRXQMXXPP

Valores, por infracción a los artículos 29, 32, letras a) y c), 52 y 53 de la Ley N° 18.045, al artículo 5 número 8 inciso primero y 37 del DL N° 3538, a las Normas de Carácter General N° 16 y N° 18, y las Circulares N° 632, N° 695, y N° 1992. Además de la intermediaria, el organismo también sancionó a Luis Flores, ex gerente general de la corredora, con participación indirecta en su propiedad, con una multa de 10.800 UF y la inhabilidad temporal por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de las entidades sujetas a fiscalización de la CMF. "Lo anterior por proporcionar información falsa al mercado, al público y a la CMF, efectuar operaciones con el objeto de fijar el precio de un valor, la realización de operaciones ficticias y por instruir la realización de operaciones del giro durante el período en que la Corredora de Bolsa se encontró suspendida.

Asimismo, los señores Ariel Sauer y Daniel Sauer, ambos con participación indirecta en la propiedad de la corredora, fueron sancionados con una multa de 9.000 UF cada uno y la inhabilidad temporal por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de las entidades sujetas a fiscalización de la CMF. Esto por proporcionar información falsa al mercado, al público, y a la CMF Junto con ello, la CMF estableció en la resolución que "los sancionados infringieron diversas obligaciones legales y normativas que rigen a los intermediarios de valores, vulnerando el cumplimiento de los estándares que resultan esenciales para el correcto desarrollo del mercado, que buscan cautelar la solvencia de los corredores de bolsa, velando por que cuenten con la capacidad financiera adecuada para el desarrollo de tales labores y resguardar la transparencia del mercado. La CMF instruyó además la adopción de una serie de medidas destinadas a informar adecuadamente y proteger a los inversionistas que mantengan a la fecha relaciones contractuales con STF Capital Corredores de Bolsa SpA.

Terminada estas cuestiones previas, entrando a las Resoluciones reclamadas, indica que la argumentación central del reclamo de ilegalidad se construye sobre la errada base de que, la medida de suspensión de actividades de la Corredora, dispuesta por el lapso en que continúe en tramitación el reclamo de ilegalidad, ingreso rol N° 601 2023, correspondería a una sanción, que a través de los actos administrativos reclamados daría el carácter de ejecutoria a la cancelación de la Corredora del Registro de



Corredores de Bolsa y Agentes de Valores impuesta en el contexto del procedimiento administrativo sancionatorio seguido a su respecto.

Sostiene que lo expuesto en el reclamo demuestra una total falta de entendimiento del marco regulatorio institucional que rige a la Comisión para el Mercado Financiero en cuanto servicio público al cual corresponde la regulación y fiscalización del mercado de valores establecido en el DL 3538, así como de las específicas que conforman la potestad de policía y atribuciones de supervisión que la Ley de Mercado de Valores le confiere respecto de los corredores de bolsa, lo que culminó en el control ejercido por la Comisión para el Mercado Financiero respecto de la reclamante.

En el caso de marras, la atribución de la Comisión corresponde al ejercicio de una facultad que no es una medida sancionatoria, especialmente, porque no se produjo como resultado de un procedimiento sancionatorio orientado a determinar la concurrencia de infracciones a la normativa vigente y responsabilidad administrativa asociada, sino, por el contrario, de mera aplicación de normas registrales por la CMF.

Indica que es necesario tener en consideración que el artículo 20 N° 12 del Decreto Ley N° 3538 consagra la potestad para el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero en virtud del cual para velar por el cuidado de la fe pública y la protección de los inversionistas y habiéndose dado cabal cumplimiento a todos los requisitos dispuestos por la ley, adoptó la suspensión de la actividad STF Capital Corredores de Bolsa SpA.

Lo más grave que se tuvo en vista es que, más allá del incumplimiento de la razón de cobertura patrimonial necesaria para desarrollar el giro de corredor de bolsa, se evidenció que en el tiempo en que permaneció en vigor la suspensión de actividades dispuesta por Resolución Exenta N° 2.169 de 2023, la Corredora realizó operaciones e incurrió en diversas situaciones que afectaron la confiabilidad de la información proporcionada a la Comisión.

Todo aquello se consignó en la Resolución Exenta N° 8.551 que dispuso el 16 de noviembre de 2023 la suspensión de las actividades de la Corredora, dando cuenta de una medida preventiva adoptada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 N° 12 del Decreto Ley N° 3538 distinta de aquellas sanciones que el Consejo de la Comisión puede imponer en el contexto de la resolución de un procedimiento administrativo sancionatorio del Título IV de dicho Decreto Ley y el artículo 37 de la misma.



Agrega en cuanto a la naturaleza de la medida de suspensión de actividades y el adecuado resguardo del interés público y los inversionistas Conforme se ha venido exponiendo, mediante la Resolución Exenta N° 8.551 de 16 de noviembre de 2023, la Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero resolvió ejecutar el acuerdo del Consejo de la Comisión adoptado en Sesión Ordinaria N° 366 de 16 de noviembre de 2023, de suspender la totalidad de las actividades de STF Capital Corredores de Bolsa SpA, por el lapso en que continúe en tramitación el reclamo de ilegalidad ingreso rol N° 601 2023, es decir, hasta que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que resuelva dicho reclamo. Así, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la medida adoptada obedeció al ejercicio de la potestad establecida en el artículo 20 N° 12 del Decreto Ley N° 3538 en cuya virtud el Consejo de la Comisión puede disponer la suspensión provisional de las actividades de una entidad fiscalizada en casos graves y urgentes debidamente calificados, total o parcialmente, mediante resolución fundada.

Más todavía, la suspensión total de actividades, materia de esta reclamación, consideró las situaciones detectadas a propósito de la suspensión dispuesta en virtud de las Resoluciones Exentas N° 2.169 y N° 3.711 de 2023. Tales actos administrativos dispusieron la suspensión de actividades de la Corredora en atención a entre otras cosas el incumplimiento de la razón de cobertura patrimonial necesaria para el desarrollo de la actividad de intermediario de valores.

Abunda el informe que en el proceso Administrativo se acreditó, y, además, se reconoció por la Corredora que, durante el período de suspensión dispuesto por la resolución Exenta N° 2169, de 2023, de la Comisión, la Corredora realizó operaciones de su giro exclusivo, intermediando en operaciones OTC valores que tiene en custodia de sus clientes, como ha ocurrido con la intermediación de cuotas de la serie B del fondo CFICAP1B E. Que las mencionadas operaciones como se expresara, tuvieron lugar los días 12, 13, 17 y 24 de abril de 2023, respecto de los clientes Rose Anne Bugge, Makarena Barrios Ortiz y Rolando Allende Saa, y consistieron en renovaciones de pactos, en los que los clientes financiaron a la Corredora, entregándole dinero, obligándose ésta a devolverlo en un plazo, más el pago de una tasa de interés, entregando en garantía cuota s de la serie B del fondo CFICAP1BE, obligándose a recomprarlos una vez que



venciera dicho plazo. Que el 23 de marzo de 2023, la CMF acordó suspender, por un plazo de 30 días, las actividades de STF, siendo dicho acuerdo ejecutado a través de la Resolución Exenta N° 2169 de 24 de marzo de 2023. El referido acto administrativo dispuso que la corredora de bolsa no podrá realizar operaciones de su giro exclusivo, ni realizar nuevas operaciones que impliquen la tenencia temporal o permanente de activos de clientes tales como la custodia de valores, administración de cartera, aporte y rescate de cuotas de fondos, comisiones específicas para la compraventa de valores extranjeros, operaciones de compraventa de moneda extranjera y operaciones de derivados, exceptuando aquellas que correspondan a operaciones y compromisos pendientes de liquidación a la fecha de esa Resolución y ventas de instrumentos de cartera propia para dar cumplimiento a las citadas operaciones y compromisos. Que dicha resolución, además, estableció que la Corredora deberá abstenerse de realizar transacciones de financiamiento u otorgar garantías a sus personas relacionadas, por el periodo en que se mantenga la suspensión.

Ahora bien, durante la suspensión antes referida, STF realizó, al menos, cuatro operaciones de financiamiento a través de pactos con sus clientes, los días 12, 13, 17 y 24 de abril de 2023, transacciones que corresponden a operaciones de su giro exclusivo e implican la tenencia temporal de dinero de sus clientes y, durante el referido período, STF mantuvo la custodia de valores de alguno de sus clientes.

Para la informante hubo un cúmulo de gravísimas infracciones de STF acreditadas por la Comisión para el Mercado Financiero, como son:

1. La Corredora proporcionó información falsa al mercado, al público y a la Comisión para el Mercado Financiero, de manera grave y reiterada.
2. STF manipuló, de forma premeditada, el precio de valores negociables.
3. STF ejecutó, de forma deliberada, transacciones ficticias.
4. STF incumplió las normas sobre cobertura patrimonial mínima para una corredora de bolsa:

Todo lo cual detalla en su informe

Luego sostiene que el reclamante no controvertió en este procedimiento, ni los hechos, ni las infracciones imputadas. Ni durante el proceso administrativo seguido contra el Reclamante ni en estos autos, la



Corredora ha controvertido los hechos en que se fundan los cargos imputados, los que en definitiva configuraron las conductas infraccionales sancionadas. En efecto, durante la investigación desarrollada por la Unidad de Investigación de la CMF, en virtud de denuncias efectuadas por la Dirección General de Supervisión Prudencial de la Comisión, el 16 de mayo de 2023, el Sr. Flores, en su carácter de Gerente general de STF, inició un proceso de colaboración al amparo del artículo 58 del Decreto Ley N° 3538 de 1980, por si y por una nómina de 15 personas relacionadas con la Corredora. En dicha solicitud expuso:

“(...) vengo en formular solicitud de beneficios en los siguientes términos “(3) Conducta por la cual se está solicitando el beneficio. La Corredora incurrió en hechos consistentes en (y que implicaron) movimientos contables, de flujo y documentales que tuvieron por objeto y efecto que se proporcionara a la CMF información que permitiera cumplir con los índices de patrimonio, liquidez y solvencia, que se reportan periódicamente a la autoridad.

Estos hechos tuvieron lugar, principalmente, en el primer semestre de 2022, sobre todo durante los meses de enero y febrero de dicho año. Sin perjuicio de lo anterior, hubo episodios de igual naturaleza ocurridos con anterioridad y con posterioridad a la época señalada.”

Indica que la Resolución Exenta N° 8.551 de 2023 dejó en claro que la Corredora no cumplió ni presentó nuevos antecedentes relativos al cumplimiento de la razón de cobertura patrimonial definida en la Norma de Carácter General N° 18. En cuanto a ello, el artículo 29 de la Ley N° 18.045 prescribe que los intermediarios de valores deberán cumplir y mantener los márgenes de endeudamiento, de colocaciones y otras condiciones de liquidez, solvencia patrimonial y gestión de riesgos que establezca la Comisión. Así, la Norma de Carácter General N° 18 establece que el patrimonio líquido del intermediario no podrá ser inferior a su monto de cobertura patrimonial. A su vez, el patrimonio líquido del intermediario y su monto de cobertura patrimonial se determinarán conforme a lo dispuesto en la sección II de aquella norma. Así las cosas, el incumplimiento de la razón de cobertura patrimonial no implica un mero incumplimiento normativo, sino que se trata de un requerimiento necesario para la adecuada gestión de los riesgos inherentes al desarrollo del giro de intermediario de valores.



De este modo, habiéndose incumplido dicha razón de cobertura y no habiéndose acreditado la regularización de tal situación, aquello contribuyó a la configuración de una situación grave y urgente que motivó la suspensión de la totalidad de las actividades de la Corredora como se realizara a través de la Resolución Exenta N° 8.551.

En cuanto a la motivación de la medida de suspensión de actividades y la supuesta infracción al principio de proporcionalidad, sostiene que la propia Resolución Exenta N° 8.551 de 2023 indicó que la situación grave y urgente que motivó la suspensión de la totalidad de las actividades de la entidad correspondió a las graves infracciones sancionadas, así como las situaciones detectadas a propósito de la suspensión de actividades dispuesta en virtud de las Resoluciones Exentas N° 2.169 y N° 3.711 de 2023.

En cuanto a la supuesta infracción del principio de legalidad y el debido Proceso reitera que la potestad ejercida en la especie no resulta ser una sanción administrativa dispensada en reproche de una conducta infraccional de parte de la Corredora, en específico, la suspensión provisional de las actividades del intermediario. A mayor abundamiento, la Comisión ha dado total cumplimiento a lo establecido en el artículo 7° de la Constitución Política, por cuanto la Presidenta de la Comisión, al dictar la resolución reclamada, y los Comisionados, al sesionar el 16 y el 30 de noviembre de 2023, han sido investidos en sus cargos de conformidad con la ley y han actuado dentro de su competencia. En consecuencia, sostiene que la actuación por parte del Servicio, expresada mediante el acto administrativo reclamado y los anteriores a éste, han cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución Política y en la Ley.

En cuanto al debido proceso la Corredora esgrime su supuesta vulneración por no haberse generado una instancia administrativa que permitiera a la Comisión conocer las labores o actividades que la entidad pudiese encontrarse realizando para el desarrollo de sus actividades. Al respecto indica que la potestad de suspender provisionalmente, total o parcialmente, las actividades de una entidad fiscalizada, contenida en el artículo 20 N° 12 del Decreto Ley N° 3538, constituye una medida que puede ser adoptada de plano por parte del Consejo de la Comisión en casos graves y urgentes, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer recursos administrativos y judiciales de conformidad con lo prescrito en el referido Decreto Ley.



En la especie, en consideración a la gravedad de la situación de la Corredora y atendido el efecto suspensivo predicado de la interposición del reclamo de ilegalidad del artículo 71 del Decreto Ley N° 3538 contra la sanción de multa y cancelación del intermediario del Registro de Corredores de Bolsa y Agente de Valores, se hizo necesario disponer la suspensión de la totalidad de las actividades de la Corredora mientras no se dicte sentencia de término en el respectivo reclamo de ilegalidad.

En suma, la decisión del Consejo de la Comisión de proceder a la suspensión de la totalidad de las actividades de STF Capital Corredores de Bolsa SpA. dio adecuado cumplimiento a los requerimientos establecidos al efecto en el artículo 20 N° 12 del Decreto Ley N° 3538 por lo que no resulta procedente esgrimir una vulneración al principio de legalidad o debido procedimiento administrativo a este respecto.

TERCERO: Que en primer término cabe dejar asentado que el presente reclamo de ilegalidad adolece de un error de derecho al señalar que lo interpone en virtud del artículo 71 del DL, Decreto Ley N° 3538 en circunstancias que, como se señalará más adelante, en este caso no estamos ante un proceso sancionatorio, por lo que al reclamo de ilegalidad le resulta aplicable el artículo 70 del mismo Decreto Ley y no el indicado.

Así queda por lo demás de manifiesto en la Resolución Exenta N° 8551 de 16 de noviembre de 2023, cuando señala en su resolutivo:

“EJECÚTESE el acuerdo del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, adoptado en Sesión Ordinaria N°366 de 16 de noviembre de 2023, en los términos siguientes:

1.- SUSPENDASE la totalidad de las actividades de STF Capital Corredores de Bolsa SpA, por el lapso en que continúe en tramitación el reclamo de ilegalidad ingreso rol N°601-2023, es decir, hasta que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que resuelva dicho reclamo.

Cuestión muy distinta al caso de las Resoluciones Exentas N° 5638 de fecha 8 de agosto de 2023 y N° 6373 de fecha 31 de agosto de 2023, que expresamente señalan que aplica SANCIONES a STF Capital Corredores de Bolsa SpA, y, a Luis Flores Cuevas.

CUARTO: Que puestos en este ámbito, el artículo 70 del Decreto Ley N° 3538, dispone:



“Artículo 70.- Las personas que estimen que una norma de carácter general, instrucción, comunicación, resolución o cualquier otro acto administrativo emanado del Consejo, del presidente de la Comisión o del fiscal, según corresponda, distinto de aquellos a los que se refiere el artículo siguiente, es ilegal y les causa perjuicio, podrán presentar reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

También podrán reclamarse, con sujeción al mismo procedimiento, las resoluciones de la Comisión que impongan las prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 116 del decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos que se indican; que designen inspector delegado o administrador provisional, o renueven esas designaciones; revoquen la autorización de existencia o resuelvan la liquidación forzosa de una empresa bancaria.

De igual modo, procederá, en general, el mismo reclamo de ilegalidad para la impugnación de las demás resoluciones, órdenes o instrucciones que impongan a una persona o entidad fiscalizada por la Comisión una medida correctiva o preventiva en el ejercicio de la facultad consagrada en el numeral 30 del artículo 5 y el numeral 5 del artículo 21.

Interpuesto el reclamo, la Corte deberá pronunciarse previamente sobre la admisibilidad de éste, para lo cual el reclamante señalará en su escrito, con precisión, el acto reclamado, la disposición que supone infringida, la forma en que se ha producido la infracción y las razones por las cuales ésta lo perjudica. Cuando corresponda, el reclamante deberá acompañar el certificado que acredite que el recurso de reposición no ha sido resuelto dentro de plazo legal en los términos del artículo 65 de la ley N° 19.880 o, en su defecto, copia del escrito por medio del cual se solicita la expedición de dicho certificado. La corte rechazará de plano el reclamo de ilegalidad si la presentación no cumple con las condiciones señaladas en el presente inciso.

El reclamo de ilegalidad deberá interponerse dentro del plazo de diez días hábiles computado de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, contado desde la notificación o publicación del acto que rechaza total o parcialmente el recurso de reposición o desde que ha operado el silencio negativo al que se refiere el inciso tercero del artículo 69.



Si la Corte de Apelaciones declarare admisible el reclamo, dará traslado de éste por seis días hábiles notificando esta resolución por oficio.

Evacuado el traslado, o acusada la rebeldía, la corte dictará sentencia en el término de quince días. La sentencia que rechace el reclamo de ilegalidad será susceptible de apelación ante la Corte Suprema dentro del plazo de diez días hábiles computado de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 del Código de Procedimiento Civil, contado desde su notificación. La apelación será conocida en la forma prevista en los incisos anteriores y gozará de preferencia para su vista y fallo.

La sola interposición del reclamo de ilegalidad a que se refiere el presente artículo no suspenderá los efectos del acto impugnado.”

QUINTO: Que puestos en este ámbito, el control que se puede ejercer en sede judicial dice relación solo con la legalidad o ilegalidad del acto impugnado, es decir, cuando existe una infracción de ley propiamente tal, de manera que tanto en lo formal como en el fondo, este reclamo no constituye una nueva instancia que permita hacer una revisión de los antecedentes que se tuvo en cuenta para dictar las Resoluciones reclamadas, sólo puede velar porque en lo formal se respeten las normas de procedimiento y, en el fondo, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero le dé a las normas legales y reglamentarias propias de su ámbito el sentido y alcance que la correcta interpretación arroja.

SEXTO: Que, a la Comisión para el Mercado Financiero le corresponde velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública, considerando los intereses de los inversionistas y asegurados.

Asimismo, le corresponderá velar porque las personas o entidades fiscalizadas, desde su iniciación hasta el término de su liquidación, cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan.

Dicha Comisión se rige por lo establecido en Decreto Ley N° 3538, de 1980 (Ley 21.000) y, supletoriamente, por las normas contempladas en la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1/19653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; y en la ley N° 19.880, que establece Bases de los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QXDRXQMXXPP

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; y en la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, en todo lo no regulado expresamente.

Por su parte en conformidad al artículo 21 del Decreto Ley N°3.538, corresponde al Presidente de la Comisión ejecutar y dar cumplimiento a los acuerdos adoptados por el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero.

SEPTIMO: Que en cuanto la reclamante sostiene que las Resoluciones Exenta N° 8551, de fecha 16 de noviembre del 2023, y la N°9128, de fecha 1 de diciembre de 2023, carecen de motivación alguna, baste para descartar tal pretensión el tenor mismo de la Resolución N° 8551 que contiene una Considerativa que cumple con los estándares de fundamentación en el sentido de que deja establecido más allá de cualquier duda sus motivaciones. En efecto, hace alusión a la Resolución Exenta N°2.169 de 24 de marzo de 2023, y el motivo de la misma, agregando que en el tiempo en que permaneció en vigor la suspensión de actividades dispuesta por aquella la Comisión detectó situaciones adicionales a las inicialmente representadas a la corredora, las que fueron comunicadas a STF Capital Corredores de Bolsa SpA mediante el Oficio N°45.403 de 2023.

Que en particular, se representó que, durante el periodo de suspensión de actividades, los registros internos de la entidad dieron cuenta de diversas transacciones de compraventa de cuotas del Fondo de Inversión Capital Estructurado I (CFICAP1B-E), entre la corredora y clientes de ésta. Que en estas operaciones, los clientes de la corredora figuraron como compradores de las citadas cuotas de fondos de inversión y que analizada la documentación correspondiente, se pudo constatar que, si bien los registros internos reflejaban la existencia de operaciones a término de compra de cuotas por parte de los clientes, las comunicaciones con ellos a través de correos electrónicos dan cuenta que éstas correspondían a operaciones de financiamiento o de retro compra.

Agrega que se observó saldos de cuentas por pagar a clientes sin explicación, reconocimiento de activos e ingresos sin respaldo, aplicación de un porcentaje de cobertura inferior al correspondiente en la determinación del monto de cobertura patrimonial, no reconocimiento de obligaciones



contraídas con algunos proveedores en la determinación del índice de liquidez general, no consideración de parte de la custodia mantenida por cuenta de terceros para la determinación del patrimonio depurado, y descuento de solo un 50% del valor de una propiedad en la determinación del patrimonio líquido, en circunstancias que debía descontar la totalidad de dicho monto.

Se funda la Resolución N° 8551 además en los motivos que llevaron a dictar la Resolución Exentán N°3.711 de 26 de mayo de 2023, se resolviera suspender la totalidad de las actividades, junto con la inscripción de STF Capital Corredores de Bolsa SpA en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores por un lapso de 120 días. Y que Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto Ley N°3.538, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero mediante Resolución Exenta N°5.638 de 8 de agosto de 2023 puso término al procedimiento pendiente, disponiendo la sanción de multa de 13.500 unidades de fomento y la cancelación de STF Capital Corredores de Bolsa SpA del Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores. Aquello, atendió a la verificación de las siguientes infracciones:

“1. STF Capital Corredores de Bolsa SpA, incurrió en las siguientes infracciones:

“a) Proporcionar información falsa al mercado, al público y a la Comisión para el Mercado Financiero, de manera grave y reiterada al no entregar información veraz sobre su situación económica, patrimonial y financiera, en conformidad con lo previsto en el artículo 32 letras a) y c) de la Ley N° 18.045 y el artículo 5° número 8 inciso primero de la Ley de la CMF, en relación con lo dispuesto en artículo 29 de la Ley 18.045, las Secciones I y II de la NCG N° 18, y las Circulares N° 695, y 1992 por cuanto, a lo menos entre el 12 de marzo de 2021 y el 15 de febrero de 2023, STF informó condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia, y los estados financieros terminados al 31 de marzo y 30 de junio de 2022, que no reflejaban la real situación económica, patrimonial y financiera de la Corredora.

b) Infracción a la prohibición prevista en el inciso primero del artículo 52 de la Ley N° 18.045, toda vez que, entre el 15 de febrero y el 23 de marzo de 2023, la STF realizó una serie de 27 operaciones de compraventa de cuotas de la serie B del fondo CFICAP1B-E en la BCS, con el objeto de fijar el precio



de dicho valor, ya que la Corredora determinó sus precios de compra y de venta, actuando al mismo tiempo para su cartera propia y como intermediario del Sr. Luis Flores, ambas partes compradoras y/o vendedoras en cada una de las operaciones.

c) *Infracción a las prohibiciones previstas en el artículo 53 de la Ley N° 18.045, por cuanto, entre el 15 de febrero y el 23 de marzo de 2023, la Corredora realizó una serie de operaciones en la BCS respecto de cuotas de la serie B del fondo CFICAP1B-E, las cuales eran ficticias o simuladas, toda vez que no se realizaron con el objetivo de transferir su propiedad, sino con el propósito de que dicho valor obtuviese presencia bursátil, en los términos exigidos por la NCG 327; configurando, además, una práctica engañosa destinada a transmitir al mercado y a los clientes de STF la percepción, de que dicho valor se transaba diariamente en bolsa, aparentando una falsa liquidez, respecto de cuotas no rescatables.*

d) *Infracción a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 18.045 y el primer párrafo de la Sección IV de la NCG N° 16, en relación a la Sección III de esa misma norma, ello en relación al numeral 3.1 de la Sección I y el numeral 2 de la Sección II de la NCG N° 18, y en relación con lo previsto en las Circulares N° 632 y 695, por cuanto, al menos los días 10 y 24 de febrero de 2023, y 7 y 8 de marzo de 2023, STF dejó de cumplir y mantener la razón de cobertura patrimonial, toda vez que si bien informó para aquellos días un monto de cobertura patrimonial equivalente a un 68.79%, 59.91%, 53.98% y 52.42% del patrimonio líquido, realizados los ajustes correspondientes producto de su revisión, dichos valores alcanzaron a un 119.96%, 115.86%, 100.53% y 100.02% del patrimonio líquido, respectivamente, superando con creces el límite de 80% que el número 3.1 de la Sección I de la NCG N° 18 establece.*

e) *Infracción grave de la obligación de cumplir las instrucciones y órdenes de la CMF, en conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de la CMF, por cuanto, habiéndose dispuesto la suspensión de sus actividades, mediante la Resolución Exenta N° 2169 de 24 de marzo de 2023, STF realizó operaciones de su giro exclusivo, que implicaron la tenencia temporal o permanente de activos de clientes, al menos respecto de los clientes Rose Anne Bugge, Makarena Barrios Ortiz y Rolando Allende Saa, quienes renovaron operaciones de financiamiento en favor de la*



Corredora, las que fueron registradas indebidamente como operaciones a término en el Libro de Operaciones de STF. Dichas operaciones consistieron en que esos clientes, le entregaron a STF sumas de dinero - desde sus cuentas de inversión en STF-, con la condición de que esa corredora de bolsa le devolviera el dinero en un plazo de días determinado, y le pagara una tasa de interés. Para garantizar dicho pago a sus clientes, STF le entregó vendió- a cambio cuotas de la serie B del fondo CFICAP1B-E, obligándose dichos clientes a devolver vender- dichos valores a STF contra la entrega del dinero”.

OCTAVO: Que dentro de sus fundamentos, la Resolución Exenta N° 8551 señaló que la resolución sancionatoria ya referida fue reclamada y atendido lo dispuesto en el aludido artículo 71 del Decreto Ley N°3.538, la interposición oportuna del reclamo de ilegalidad suspende los efectos de la resolución que impuso la sanción y el transcurso del plazo para el pago de la multa, hasta que aquel sea resuelto por resolución ejecutoriada.

Luego indica que atendida la gravedad de las infracciones sancionadas, así como las situaciones detectadas a propósito de la suspensión dispuesta en virtud de las Resoluciones Exentas N°2.169 y N°3.711 de 2023, aquello importa la verificación de una situación grave y urgente que requiere de la adopción de medidas para el resguardo del interés público y la debida protección de los inversionistas el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria N°366 de 16 de noviembre de 2023, acordó proceder a la suspensión total de las actividades de STF Capital Corredores de Bolsa SpA conforme a lo prescrito en el numeral 12 del artículo 20 del D.L. N°3.538, por el lapso en que continúe en tramitación el reclamo de ilegalidad ingreso rol N°601-2023, es decir, hasta que se encuentre a firme o ejecutoriada la resolución que resuelva dicho reclamo y así lo dispuso en su Resolutivo:

“1.- SUSPENDASE la totalidad de las actividades de STF Capital Corredores de Bolsa SpA, por el lapso en que continúe en tramitación el reclamo de ilegalidad ingreso rol N°601-2023, es decir, hasta que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que resuelva dicho reclamo.”

Luego en la otra Resolución aquí reclamada la N° 9128, de fecha 1 de diciembre de 2023, pronunciándose sobre la reposición dispuso que la suspensión debe circunscribirse a la suspensión de las actividades propias



del desarrollo del giro de corredor de bolsa en los términos del Título VI de la Ley N° 18.045 del Mercado de Valores y actividades complementarias e inherentes, y no a los actos o actividades internas o administrativas de la sociedad.

NOVENO: Que de este modo, ambas Resoluciones contienen los fundamentos requeridos, la reclamante ha estado cabalmente enterada de aquello, y la autoridad administrativa que las dictó ha ejercido de un poder público acorde a la ley vigente y dentro de su competencia, por lo que tampoco se observa alguna falta al principio de la legalidad.

DECIMO: Que debe recordarse que el artículo 29 de la Ley N° 18.045 establece que los corredores de bolsa y agentes de valores, deberán cumplir y mantener los márgenes de endeudamiento, de colocaciones y otras condiciones de liquidez, solvencia patrimonial y gestión de riesgos que establezca la Comisión mediante normas de aplicación general que dictará especialmente en relación a la naturaleza de las operaciones, su cuantía, el tipo de instrumentos que se negocien y la clase de intermediarios a que deben aplicarse.

UNDECIMO: Que no resultan aplicables por analogía el desasimiento del tribunal para cuando dictan una sentencia definitiva o interlocutoria y que son objeto de recursos (de apelación o casación). De esta forma no se puede concordar con la reclamante que no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 20 N° 12 del Decreto Ley N° 3538, que permite suspender provisionalmente, en casos graves y urgentes debidamente calificados, total o parcialmente, mediante resolución fundada, las actividades de una persona o entidad fiscalizada o la cotización o la transacción de uno o más valores, y adoptar, en general, cualquier medida preventiva o correctiva que disponga la ley, en los casos en que no se cumpla con las normas necesarias para el adecuado desarrollo de tales actividades o cuando así lo requiera el interés público, la estabilidad financiera o la protección de los inversionistas, depositantes y asegurados.

DECIMO SEGUNDO: Que en cuanto al principio *Non bis in idem*, que invoca el reclamo no cabe sino concordar con la reclamada en cuanto a que la medida de suspensión total de actividades adoptada por el Consejo de la CMF y ejecutada por su Presidenta mediante Resolución Exenta N° 8.551 de 2023, no obedece a un procedimiento administrativo sancionatorio sino que a



una medida expresamente establecida en el artículo 20 N° 12 del Decreto Ley N° 3538 ya citado, como medida preventiva ordenada a la protección de los inversionistas y el interés público involucrado en la actividad de intermediación realizada en el mercado de valores.

De este modo, la aplicación del principio de *non bis in ídem* no resulta pertinente, desde que el mismo ordena a evitar la doble sanción derivada del poder punitivo del Estado, lo que no concurre en el caso.

DECIMO TERCERO: Que en cuanto invoca como materia de ilegalidad una supuesta infracción al principio de proporcionalidad, cabe señalar que Resolución Exenta N° 8.551 de 2023, fue determinante en señalar como se trata de una situación que el Consejo consideraba grave y urgente sobre todos por las cuestiones detectadas a propósito de la suspensión de actividades dispuesta en virtud de las Resoluciones Exentas N° 2.169 y N° 3.711 de 2023, antecedentes previos que la reclamada Resolución Exenta N° 8.551 de 2023 consignó en parte fundamentos cuando señala:

“...atendida la gravedad de las infracciones sancionadas, así como las situaciones detectadas a propósito de la suspensión dispuesta en virtud de las Resoluciones Exentas N° 2.169 y N° 3.711 de 2023, aquello importa la verificación de una situación grave y urgente que requiere de la adopción de medidas para el resguardo del interés público y la debida protección de los inversionistas.

Que, atendido lo expuesto en lo precedente de este acto administrativo, en cumplimiento del marco jurídico vigente y conforme a los antecedentes tenidos a la vista, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria N° 366 de 16 de noviembre de 2023, acordó proceder a la suspensión total de las actividades de STF Capital Corredores de Bolsa SpA conforme a lo prescrito en el numeral 12 del artículo 20 del D.L. N° 3.538, por el lapso en que continúe en tramitación el reclamo de ilegalidad ingreso rol N° 601 2023, es decir, hasta que se encuentre a firme o ejecutoriada la resolución que resuelva dicho reclamo”.

DECIMO CUARTO: Que en cuanto a la alegada infracción al debido proceso, por cuanto estima que debió generarse una instancia administrativa especialmente convocada previa citación de su representada, cabe señalar que como ya se adelantó la potestad ejecutada por las Resoluciones



reclamadas lo son en virtud de una potestad que no resulta ser una sanción administrativa dispensada en reproche de una conducta infraccional de parte de la Corredora, sino que en conformidad con ley y dentro de su competencia

En esta línea, la Resolución Exenta N° 9.128 de 2023, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Corredora respecto de la medida de suspensión de actividades, consignó lo siguiente sobre este particular:

“En cuanto a la alusión al debido proceso, resulta inconcuso que la medida adoptada se ajustó a los requisitos y procedimientos establecidos al efecto en el artículo 20 N° 12 del Decreto Ley N° 3.538, que atendida la gravedad de la situación permite la adopción de medidas preventivas en carácter de provisionales a efectos del resguardo del interés público, siendo adoptada en atención a la información en poder de la Comisión y sin perjuicio de la posibilidad de recurrir del acto administrativo, materializada en la presente reposición. Conforme a lo señalado, no se observa infracción al principio de debido proceso a propósito de la dictación de la Resolución Exenta N° 8.551”.

De esta manera si este acto no está precedido de cargos, no se evidencia una falta al debido proceso ni por la ausencia de aquello ni por el no ser oído previamente, como lo pretende la reclamante.

Con lo expuesto, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y 70 del Decreto Ley N° 3538, de 1980, se resuelve:

Que **se rechaza** el reclamo de ilegalidad deducidos por STF Capital Corredores de Bolsa SpA en contra de la Resolución Exenta N° 8551, de fecha 16 de noviembre del 2023, y N° 9128, de fecha 1 de diciembre de 2023 de la Comisión para el Mercado Financiero.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr Hernán Crisosto Greisse.

Rol 771-2023 Contencioso Administrativa.





Pronunciada por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Hernán Crisosto Greisse e integrada, además, por la ministra (s) señora Paola Díaz Urtubia y el abogado



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QXDRXQMXXPP

integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers. No firma la ministra (s) señora Díaz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

<div></div> <div><div>Hernán Alejandro Crisosto Greisse Ministro Corte de Apelaciones Dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro 11:48 UTC-3</div><div></div></div>	<div></div> <div><div>Rodrigo Hernán Asenjo Zegers Abogado Corte de Apelaciones Dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro 13:10 UTC-3</div><div></div></div>
--	--



Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Hernan Alejandro Crisosto G. y Abogado Integrante Rodrigo Asenjo Z. Santiago, dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QXDRXQMXXPP